español - english

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

Consorcio Técnico

El Desarrollo Rural Sostenible

y Cooperación Técnica del IICA:

Valor y Vigencia

SCT
10

Dirección de Desarrollo Rural Sostenible

— I I C A —
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
BIBLIOTECA VENEZUELA

1998 - 2002

00008406

desarrollo rural rur

© Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura / Inter American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) Octubre / October, 1998

Derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin autorización escrita del IICA / All rights reserved. Reproduction of this book, in whole or in part, is prohibited without the express authorization of IICA.

La Dirección de Desarrollo Rural del IICA fue responsable por la producción de este documento / IICA's Sustainable Rural Development Directorate is responsible for the production of this document.

El desarrollo rural sostenible y la cooperación técnica del IICA: valor y vigencia / Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. San José, C.R. : IICA. 1998

48 p. ; 28 cm. - (Serie Cuadernos Técnicos / IICA; no. 10)

Ed. en español. Editado también en inglés

Desarrollo rural. 2. Desarrollo sostenible. 3. Juventud. 4. Género humano. I. IICA. II. Título. III. Serie

Serie Cuadernos Técnicos
No. 10
Octubre, 1998
San José, Costa Rica

E14 DEWEY 307.72 ISBN 92-9039-387 4

CIRCULACIÓN RESTRINGIDA DE
50 EJEMPLARES.
LAS CORRECCIONES DE ESTE
DOCUMENTO-BORRADOR
SERÁN INCLUIDAS EN LA
VERSIÓN DEFINITIVA.

El Desarrollo Rural Sostenible

y Cooperación Técnica del IICA:

Valor y Vigencia

introducción

El proceso de globalización e integración de las economías ha propiciado estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenido en la mayoría de los países de América. No obstante lo anterior persiste la necesidad de desarrollar políticas específicas dirigidas a lograr la equidad y consecuentemente contribuir al combate a la pobreza, de tal manera que crecimiento y bienestar común se constituyen en elementos fundamentales del desarrollo.

La generación de empleo, el aumento en los ingresos, la recuperación y fortalecimiento del capital social, la creciente participación de la sociedad en los procesos democráticos, la búsqueda de equidad de género y la preservación de la biodiversidad y la ecología del planeta constituyen elementos esenciales de un desarrollo equitativo y sostenible.

A partir de ese contexto cobra gran relevancia, el espacio rural y sus habitantes, cuyas expresiones más genuinas se manifiestan en la agricultura familiar, la generación de empleo agrícola y no agrícola, lo ambiental y ecológico, el desarrollo cultural y una innovadora tendencia a la participación de la población en los procesos de municipalización y regionalización.

El Desarrollo Rural entonces, adquiere relevancia frente a los retos que impone el desarrollo sostenible y especialmente en lo relativo a la necesidad de recrear una nueva institucionalidad que permita una relación más armónica y efectiva entre las fuerzas del mercado, la sociedad civil y el estado.

El presente documento recoge el producto de un diálogo abierto al interior del IICA y con instituciones nacionales, organismos internacionales de cooperación técnica y financiera, universidades, ONGs y organizaciones rurales, cuyo objetivo ha sido identificar de manera conjunta las características contemporáneas de la ruralidad y sus contribuciones reales y potenciales al desarrollo sostenible.

Confirma también el valor y la vigencia del trabajo del Instituto en el ámbito del desarrollo rural como una respuesta a su mandato de contribuir al desarrollo agrícola y el bienestar rural de las Américas.

Clara Solìs - Araya

Directora de Desarrollo Rural Sostenible

introduction

Economic globalization and integration have led to macroeconomic stability and sustained growth in most of the countries of the Americas. However, there is still a need to develop specific policies that promote equity and, consequently, to contribute to reducing so that growth and general well-being become basic elements of development.

Job creation, higher incomes, the recovery and strengthening of social capital, greater participation of civil society in democratic processes, the search for gender equity, and the preservation of the Earthís biodiversity and ecology, are essential elements of equitable and sustainable development.

In this context, rural areas and their inhabitants take on great importance, especially as regards family agriculture, the generation of agricultural and non-agricultural employment, the preservation of the planet's biodiversity and ecology, cultural development, and a new trend to involve the population in municipalization and regionalization processes.

Rural development, then, is an important aspect of efforts to meet the challenges posed by sustainable development, especially as concerns the need to renew the institutional framework that will promote more harmonious and effective relations among market forces, civil society and the state.

The objective of this document, which is the result of a open dialogue within IICA and with national institutions, international technical and financial cooperation agencies, universities, NGOs, and rural organizations, was to jointly characterize todayís rural setting, and its real and potential contributions to sustainable development.

It also confirms the value and relevance of the Instituteís work in the field of rural development, in response to its mandate to contribute to agricultural development and rural well-being in the Americas.

Clara Solìs - Araya

Director of Sustainable Rural Development

desafíos actuales:
los retos como oportunidades

En las últimas décadas han ocurrido un conjunto de cambios socioeconómicos y políticos en el contexto internacional, que obligan a una revisión de los conceptos y propósitos del desarrollo. El fenómeno de la globalización, con las tecnologías de la información a la cabeza, ha tenido efectos multidimensionales en todo el planeta. No solamente ha provocado la integración de los mercados financieros y la apertura de las economías en todo el mundo, sino que sus consecuencias han sido también sociopolíticas y culturales. Estos últimos aspectos todavía aparecen en un segundo plano dentro de los análisis, detrás de las transformaciones de la economía, quizá porque es ahí donde los cambios son más visibles y espectaculares.

Pese a la desigual y parcial articulación de las economías con el mercado mundial, todos los países, incluso los menos industrializados, han quedado enmarcados dentro de un contexto de competitividad extremadamente acentuada, lo que ha modificando significativamente también el papel de los estados y de las relaciones sociales. La apertura comercial y financiera, que ha pasado a ser parte primordial de la nueva estrategia de desarrollo, ha estado acompañada por una reducción substancial del peso del Estado en la economía; una relativa disminución del gasto público, sobre todo en el plano social, y un acomodo de las instituciones del Estado. El impacto de estos cambios fue muy fuerte en algunos segmentos de la producción, pues provocaron el abandono de proyectos y programas. En particular la agricultura de productos tradicionales, sobre todo los dirigidos a los mercados internos, se ha visto sumamente afectada, disminuyendo en muchos casos la calidad de vida de la población rural. Paradójicamente, estas transformaciones internas ocurrieron en buena parte de los países de la región, dentro de procesos de apertura democrática.

Las consecuencias de todas estas transformaciones en el mundo rural de América Latina y el Caribe (ALC) han sido de tal magnitud que lo han llevado a configurarse hoy, como un mundo rural nuevo y ampliado, tanto desde la perspectiva de los actores, como de sus relaciones con los contextos sociales en que están inmersos. En las décadas pasadas las sociedades rurales producían fundamentalmente alimentos básicos para el mercado interno y materias primas para la industria y la exportación. Ese esquema fue alterado por la globalización, que ha estimulado la diversificación de la producción, sobre todo la dirigida hacia los mercados externos. El aislamiento que otrora fue una característica del mundo rural, tiende a desaparecer; las fronteras entre lo rural y lo urbano se han vuelto cada vez más porosas, lo que implica una gran fluidez en los intercambios, con importantes influencias mutuas en la cultura, la economía, las relaciones sociales y la política. Progresivamente ambos espacios se han ido acercando, hasta establecer una especie de continuum. Esta nueva ruralidad abre oportunidades y presenta algunos retos para enfrentar la mezcla abigarrada de viejos problemas sin resolver y nuevos por encarar.

De acuerdo con los datos del CELADE (1995), la población total de América Latina era en 1995 de 467,3 millones de habitantes, de los cuales el 74% habitaba en zonas urbanas, contrastando con el porcentaje de habitantes de las zonas rurales, que ha venido disminuyendo sostenidamente desde 1970, pasando del 43% al 26% en 1995. Esta disminución no solamente ha sido el producto de las migraciones del campo hacia las grandes ciudades, sino también es debida al hecho de que los habitantes de las zonas rurales tienden a vivir cada vez más en poblados o en pequeñas ciudades, modificando substancialmente las relaciones entre la ciudad y el campo. Los estudios recientes sobre América Latina y el Caribe (CELADE/BID, 1996) muestran que la corriente migratoria del espacio rural hacia el urbano ha disminuido como tendencia general: sigue siendo importante en países con grados de urbanización relativamente bajos; pero en países de antigua urbanización y de alta concentración demografica, los flujos migratorios ocurren entre espacios urbanos. Las grandes ciudades han cedido su lugar como focos principales de atracción, en beneficio de las ciudades de tamaño medio.

Además, es notorio, desde 1980, el enorme crecimiento de la

población urbana en condiciones de pobreza (CEPAL, 1997). En las áreas rurales las tasas de crecimiento de la pobreza han sido menores; sin embargo, comparativamente la proporción de población pobre es mayor. En países como Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Venezuela, más del 66% de los hogares rurales pueden hoy ser catalogados como pobres; en Brasil, Colombia, El Salvador, México, Panamá, Paraguay y Perú, ese porcentaje oscila entre el 34% y el 66%, mientras que solamente es menor en Argentina, Costa Rica, Chile y Uruguay (BID, 1998b). En 1997 la población en situación de pobreza continuaba siendo la misma para aproximadamentelos 150 millones de habitantes de América Latina y el Caribe (BID, 1998a). La desigualdad social en ALC - que es hoy la región del mundo con lo peor distribución de ingreso - no disminuyó significativamente, más bien en muchos casos aumentó: el 20% más pobre recibe el 3% del total del ingreso, mientras que el 20% superior, capta el 60%. Como consecuencia, la desintegración social se ha acentuado en toda la region.

De acuerdo con el "Informe de la Comisión Latinoamericana y del Caribe sobre el Desarrollo Socialial" (1995), la situación de pobreza afecta proporcionalmente m·s a las mujeres que a los hombres. Las mujeres se sitúan entre los grupos de menores ingresos, debido, entre otras causas, a la inequidad laboral existente y a las dificultades de acceso a recursos productivos: tierra, crédito, asistencia técnica e insumos diversos. Las dificultades que experimentan las mujeres tienen un gran impacto sobre el conjunto de la población, sobre todo porque muchas de ellas son jefes de hogares. De acuerdo con el Informe señalado, en ALC el 20% de los hogares tiene jefatura femenina.

En algunos de los países de Centro y Sudamérica, el fenómeno de la pobreza rural aparece ampliamente conectado con la existencia de grandes poblaciones indígenas, localizadas espacialmente tanto en zonas del altiplano como en áreas de expansión de la frontera agrícola. En estos casos, al fenómeno de la pobreza se suman exclusiones y discriminaciones diversas, que complican bastante el panorama. Generalmente experimentan condiciones de vida más difíciles que el resto de los pobres de las zonas rurales, porque sufren discriminación racial, sus tierras ancestrales se han visto cercenadas por la colonización no indígena, y sus posibilidades de acceso a servicios públicos como educación y salud, así como a las facilidades de la vida moderna son limitadas.

En los últimos años el paradigma del mercado como único orientador y regulador de la asignación de recursos ha ido cediendo su lugar a nuevas realidades. No solamente no respondió positivamente a las demandas de las mayorías empobrecidas de la región, sino que tampoco los logros económicos fueron los esperados. Aunque en casi todos los países de ALC disminuyó la tasa promedio de inflación, crecieron las exportaciones y bajó el déficit del sector público, las tasas de crecimiento se mantuvieron en la mayoría de los casos por debajo de los niveles alcanzados en los años sesenta y setenta: Según CEPAL (1998), entre 1990 - 1996 el crecimiento económico promedio de la región fue de 3.1%.

La Cumbre de las Américas (abril 1998), se realizó en un contexto de debate sobre los resultados de las reformas económicas y de reconocimiento que la intervención eficiente del Estado es indispensable en sociedades con altas desigualdades sociales, y que su acción debe complementar al mercado si se pretende alcanzar un desarrollo social equilibrado. Los jefes de Estado ahí reunidos declararon expresamente que la superación de la pobreza sigue siendo el reto más grande que enfrenta el Continente y demandaron la eliminación de las barreras que impiden a los pobres el acceso a la nutrición adecuada, a los servicios sociales, a un medio ambiente sano, al crédito y a los teitulos legales de sus propiedades.

Sin embargo, la solución de los problemas del agro latinoamericano requiere de una visión de largo plazo, que posibilite procesos donde se combinen la acción permanente del Estado, a través de los programas específicos de los gobiernos, con las iniciativas propias de la sociedad civil. Las aperturas democráticas en la región, junto con las transformaciones sufridas por las instituciones estatales, han aumentado las posibilidades de participación de la sociedad en la toma de decisiones políticas; se ha creado un espacio de participación potencialmente aprovechable para impulsar acciones conjuntas que respondan a las demandas de aumento de la producción y de mejoría en la distribución de la riqueza.

Estos desafíos imponen la formulación de políticas y estrategias de Desarrollo Rural Sostenible, capaces de articular funcionalmente los espacios rurales y urbanos y propiciar procesos tendientes a:

∞Reducir la pobreza, para garantizar la equidad social. Según CEPAL, la pobreza rural solamente disminuyó de 56% a 55% desde 1990 a 1994 y la indigencia rural se mantuvo en 33% en el mismo período. Se estima que en las áreas rurales de ALC viven aproximadamente 73,9 millones de personas en situación de pobreza, la mayoría de ellas en condiciones de indigencia: 46,4 millones (CEPAL, 1997).1 Esta abrumadora realidad requiere de un gran esfuerzo para desarrollar una visión de largo plazo, materializada en políticas permanentes para la reducción real de los índices de pobreza.

∞Establecer incentivos, sistemas de apoyo y asistencia efectiva para incrementar la productividad del sector agrícola. Es necesaria la construcción de mecanismos que faciliten a los pequeños y medianos productores alcanzar los niveles de competitividad adecuados a las actuales circunstancias del mercado, agregar valor a su producción, producir excedentes y obtener las bases de la formación de capital. Por otro lado, es fundamental desarrollar mercados en las áreas rurales, integrados con el sector agroindustrial y de servicios, y generar otras formas de empleo agrícola y no agrícola en las áreas rurales.

∞Disminuir los desequilibrios espaciales y la brecha entre lo urbano y lo rural. La concentración de población en algunas regiones de América Latina y el Caribe, los patrones de migración vigentes y las deficientes condiciones de vida en las áreas rurales, son componentes de un conjunto de problemas que coadyuvan en el mantenimiento de las desigualdades y diferenciaciones que limitan un proceso de desarrollo sostenible.

∞Fortalecer y desarrollar la democracia y la convivencia social. La democracia y el desarrollo rural sostenible con equidad están estrechamente relacionados. Es necesaria la convivencia democrática entre los distintos actores sociales, para que los intereses diversos logren conciliarse y avanzar en la dirección de decisiones consensuales. Dentro de esta perspectiva, es absolutamente necesario incentivar la organización de los pobres de las zonas rurales, a fin de que puedan negociar con el Estado y con otras instancias de la sociedad civil en condiciones favorables para sus intereses e ideales.

∞Lograr un crecimiento sostenible con gobernabilidad y equidad. Los estados deben tener capacidad para establecer políticas socioeconómicas y manejar instrumentos que posibiliten la solución de los conflictos de intereses entre los diferentes grupos sociales. Este tipo de crecimiento requiere también que se formulen y ejecuten políticas capaces de reducir los niveles de concentración de la riqueza que genera inequidades y agrava los conflictos sociales.

∞Construir y desarrollar instituciones. La creciente participación de las organizaciones sociales en las acciones de desarrollo rural, necesita de instituciones estatales capaces de acompañar dicho proceso. Eso implica, por un lado, una redefinición de los papeles del sector público y privado, y, por el otro, una transferencia del poder de decisión sobre las acciones de desarrollo hacia los niveles regionales y locales.

∞Superar los obstáculos legales y jurídicos que impiden el acceso de la población a bienes y servicios. La posibilidad de tener acceso a bienes y a servicios proporcionados por el sector público o por el privado, está en relación directa con los niveles de pobreza.

∞Establecer los cimientos para el desarrollo de instrumentos para el uso y manejo del hábitat rural en zonas de fragilidad ecológica. Las tasas actuales de deforestación, pérdida de suelo y fuentes de agua, así como de contaminación ambiental de distintos orígenes, demandan una acción correctiva inmediata y efectiva en la mayoría de los países de la región.

∞Propiciar el acceso de las mujeres rurales a bienes, servicios y a los beneficios del desarrollo (recreación, fortalecimiento humano, participación, etc.). De acuerdo con las Naciones Uni-

das, en los países en desarrollo las mujeres conforman el 67% de la fuerza de trabajo y son responsables de la producción de m·s del 55% de los alimentos (1995). En América Latina y el Caribe ha ido en aumento la participación femenina dentro de la fuerza laboral del sector rural. Algunos ejemplos señalados por CEPAL (1996) confirman este crecimiento: en Brasil la tasa de participación de la mujer en actividades económicas en zonas rurales, alcanzaba a un 41% al comenzar la presente década; en Chile y Guatemala un 19%; en Costa Rica y Honduras un 28%; en México un 26%; en Panamá un 24% y en Venezuela un 23%. Es posible que las estadísticas no revelen adecuadamente la tendencia hacia una feminización creciente de la agricultura, dados los sesgos existentes en la recolección de datos. En todo caso, las mujeres rurales tienen dificultades para el acceso equitativo a tierra, crédito, capital y servicios de extensión, aun cuando son ellas las que más utilizan los recursos suelo, agua y bosque, tanto para la subsistencia básica de sus familias, como para generar ingresos complementarios.

∞Favorecer el acceso de la población indígena a bienes y servicios. Aunque buena parte de la población indígena se ha visto obligada a abandonar las zonas rurales y a establecerse en áreas urbanas, todavía existen grandes concentraciones de población indígena en las zonas rurales, sobre todo en Mesoamérica y el Altiplano Andino. Los pueblos indígenas conforman la mayoría de la población rural en varios de los países de América Latina, pero sus posibilidades de acceso a la tierra, al crédito y a los servicios siguen siendo limitadas. Una política de Desarrollo Rural Sostenible en esos países debe contemplar las particularidades étnicas, a fin de preservar un balance entre las necesidades de modernización y el respeto a valores ancestrales y a prácticas agrícolas altamente ecológicas, que favorecen la preservación del medio ambiente. Un tratamiento similar debe darse a otras poblaciones que en algunos países padecen de exclusión socio-cultural debido a sus orígenes étnicos.

∞Crear condiciones favorables para la inserción de la juventud rural dentro de las actividades productivas y para su participación en la cimentación de una ciudadanía ampliada. La juventud conforma un segmento muy importante de la población rural de América Latina: de acuerdo con datos de CELADE (1995), la población rural entre 12 y 24 años era en 1995 de 30,2 millones; aunque para el año 2000 se prevé una leve disminución, sigue representando aproximadamente el 23% de la población rural de la región (Dirven, 1995). El mundo rural, tal y como ha estado estructurado hasta ahora, no ofrece a los jóvenes grandes incentivos desde el punto de vista laboral y de mejoramiento del status y de la calidad de vida: las oportunidades de trabajo son limitadas en la agricultura y la ganadería, y en estas actividades las remuneraciones son generalmente bajas. Gran parte de los jóvenes busca nuevos horizontes en los ámbitos urbanos, pero muchos permanecen todavía en el campo. Los estudios indican que los niveles educativos de los jóvenes rurales son en general más elevados que los de sus padres; sin embargo, las carencias siguen siendo significativas en este ámbito. Las aceleradas transformaciones que está sufriendo el mundo rural abren nuevas posibilidades de empleo en una agricultura ampliada y en los servicios; pero demandan conocimientos y destrezas que los jóvenes rurales tendrán que adquirir y desarrollar para estar en condiciones de emplearse satisfactoriamente. Es necesario, por tanto, una transformación en el enfoque seguido por las instituciones educativas en el medio rural. Además es urgente desarrollar programas continuos de capacitación, tanto en los aspectos relativos a la producción como a la participación ciudadana y la preservación de la identidad. También es indispensable la generación de oportunidades para el desarrollo empresarial, lo que significa acceso al crédito y otros recursos productivos.

∞Generación de ingresos, excedentes y capital, acompañado de una distribución equitativa. La eliminaciíón de la pobreza requiere no sólo la creación de condiciones para la generación de ingresos y capital, sino fundamentalmente la existencia de mecanismos adecuados para garantizar la distribución equitativa de los ingresos entre la población rural.

∞Fortalecimiento y desarrollo humano. Una de las condiciones fundamentales para el logro de un desarrollo sostenible es el desarrollo humano de las mujeres y los hombres que conforman las sociedades rurales. Esto requiere una revalorización del capital social y de la diversidad cultural, étnica y de género. Se trata de impulsar un desarrollo rural sostenible que se fundamente y busque fortalecer la riqueza que constituye el elemento humano.

la del desarrollo sostenible

La concepción del desarrollo ha evolucionado rápidamente a partir de la "Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo", celebrada en Río de Janeiro en 1992. Después de las propuestas que conformaron la bien conocida "Agenda 21", la concepción puramente economicista del desarrollo ha sido atemperada por un enfoque que incorpora explícitamente otras dimensiones esenciales: la social, la político - institucional y la medio - ambiental. Esta visión del desarrollo mezcla expresamente objetivos vinculados con la competitividad económica, con la equidad social, con la sostenibilidad medio-ambiental y con la gobernabilidad en el plano político. Objetivos cuyo logro implica un proceso que pretende alcanzar en el largo plazo la estabilidad social y espacial, a fin de que: a) la existencia humana pueda continuar indefinidamente; b) las individualidades humanas tengan la posibilidad de crecer y multiplicarse; c) las particularidades culturales puedan sobrevivir y d) las actividades humanas se encausen dentro de límites que no pongan en peligro la diversidad, la complejidad y las funciones del sistema ecológico que sirve precisamente de base a la vida.

El Desarrollo Sostenible (DS) se plantea como un proceso de transformación de las diferentes dimensiones o componentes del "sistema de la sociedad nacional", proceso que implica modificaciones drásticas en la asignación de las inversiones, tanto procedentes de fuentes internas como externas; así como también cambios institucionales y políticos, que no solamente edifiquen una efectiva y predecible administración pública, sino que también introduzcan reformas substanciales en los gobiernos, de acuerdo con las condiciones específicas de cada país, que conduzcan a una ampliación de los espacios democráticos. En otras palabras, no solamente reformas en la política económica destinadas a promover la planificación y la eficiente utilización de los recursos - todo ello conjugado con transformaciones de orden tecnológico e informático-, sino también apertura de los procesos de toma de decisiones a una mayor participación ciudadana.

El modelo de desarrollo seguido hasta ahora ha determinado la distribución espacial de las actividades económicas, la concentración territorial de la población, la localización y el grado de crecimiento de los centros urbanos, así como también los tipos de vínculos entre determinadas unidades territoriales y el resto del territorio nacional. Se ha creado así una diferenciación espacial en la cual cada región adquiere papeles productivos, económicos y sociopolíticos concretos. Como consecuencia de este hecho, el proceso de DS logra en las unidades geográficas regionales su espacio de aplicación. En dicho espacio es posible conjugar estrategias nacionales con políticas dirigidas a superar los factores responsables de los desequilibrios que impiden su pleno desarrollo e inhiben la participación de la población en los beneficios del proceso de crecimiento.

El DS de las sociedades rurales es entonces parte de un proceso que se vincula, cuando menos, con tres grandes componentes: a) la base de recursos naturales y el medio ambiente; b) la producción y el comercio y c) la organización socio-cultural e institucional. Es decir, los agentes económicos utilizan la base de recursos naturales y adquieren insumos para satisfacer sus necesidades

de producción, ofreciendo bienes y servicios a los consumidores mediante la intermediación de los mercados y sus respectivos agentes, en el marco de la organización y las circunstancias sociales de un sistema institucional que demarca condiciones de operación. Este último aspecto merece especial atención, dado el efecto condicionante que puede tener sobre todo el proceso.

En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, el peso del Estado sobre la sociedad ha sido determinante dentro de los procesos sociopolíticos. La fuerte presencia estatal en algunos casos permitió la construcción de instituciones públicas que jugaron un papel muy activo, empujando el desarrollo económico y propiciando el bienestar social; en otros las instituciones públicas fueron una especie de peso muerto sobre la sociedad. En uno y otro caso, sin embargo, la fuerte presencia estatal impidió el desarrollo de una sociedad civil autónoma y fuerte, capaz de relacionarse con las instituciones públicas en un plano de relativa igualdad. El autoritarismo y el clientelismo presente en muchas situaciones nacionales, generaron dependencia, sumisión y en algunos casos resistencia y violencia.

En los años ochenta, las ideas predominantes postularon el "Estado mínimo" y el predominio del mercado, como panacea a los problemas que padecían estas sociedades. Después de más de una década de reformas, dichas ideas han empezado a perder fuerza y su lugar ha comenzado a ser ocupado por un planteamiento que trata de superar "...la falsa antinomia Estado vs. mercado" (Kliksberg, 1998). Es un planteamiento que reconoce el importante papel que el Estado tiene en los aspectos relativos a regulación, protección social y seguridad social (Stiglitz, 1998), pero que también reconoce la necesidad de un fortalecimiento de la sociedad civil y una ampliación de los espacios de participación ciudadana. En suma, se trata de vincular la acción del Estado a las oportunidades que ofrece el mercado y a las iniciativas provenientes de la sociedad civil. Ello implica la construcción o reconstrucción de instituciones - lo que se denomina nueva institucionalidad-, a fin de que el Estado pueda interactuar ágilmente con el mercado y la sociedad civil, en campos estratégicos para el desarrollo económico y social de los países. Un Estado inteligente, concertador, capaz de desatar sinergías y promover la participación de la sociedad civil.

Pero "nueva institucionalidad" significa también un crecimiento de la sociedad civil, no solamente en términos de aumento de la organización, sino también de la capacidad de proponer soluciones y responder en forma creativa a las demandas del mercado y las proposiciones del Estado. Comprende también el reconocimiento de la existencia de otros sectores que han comenzado a jugar un papel destacado como actores sociales: las mujeres, los grupos étnicos y la juventud. En cierta medida, la "nueva institucionalidad" implica una ampliación de la ciudadanía, tanto porque nuevos actores irrumpen en los espacios de ejercicio de ella, como por el hecho de que dicho ejercicio tiende a ser cada vez más activo y consciente.

El Desarrollo Rural Sostenible (DRS) se concibe como el proceso de transformación de las sociedades rurales y sus unidades territoriales; proceso centrado en las personas, que a partir de estrategias nacionales busca ampliar las oportunidades de desarrollo humano, con políticas específicas dirigidas a la superación de los desequilibrios sociales, económicos, institucionales y ecológicos. Tiene como objetivo fundamental el ser humano en sus diferentes manifestaciones y acciones, tanto en el nivel individual como en el social.

El proceso de cambio y transformación de las sociedades rurales incluye aspectos económicos, sociales, políticos y culturales que interactúan permanente; dentro de una dinámica multisectorial y multidimensional. Lo económico busca fundamentalmente mejorar

los ingresos de las familias y los individuos; lo social las condiciones de organización de las comunidades y su nivel de vida; lo político la participación en la toma de decisiones y el desarrollo de una ética política donde la norma sea la acción de todos los actores y el fortalecimiento de la democracia; lo cultural el respeto a los elementos de diferenciación, a los modos de vida y a la cultura rural.

Estas facetas del Desarrollo Rural Sostenible sólo se pueden alcanzar y articular si se parte de una institucionalidad pública y privada adecuada. Por ello, el DRS consiste, en el fondo, en la búsqueda permanente de una institucionalidad que potencie las capacidades de los individuos y los grupos para actuar de una manera ordenada y equitativa dentro del proceso, bajo reglas de juego legitimadas y respetadas, que permitan una convivencia de las sociedades en el ámbito rural y un mejoramiento en el bienestar de los individuos, dentro de un clima de respeto a la cultura rural como elemento inseparable del proceso. Ello significa que tanto las instituciones públicas como las privadas que se ocupan del desarrollo rural y temas conexos, deben introducir cambios en la cultura institucional. Solamente de esa manera estarán en capacidad de interactuar como lo demandan las nuevas circunstancias, con un conjunto de actores en el mundo rural, que reclaman relaciones horizontales y mayor fluidez en los intercambios.

Una sociedad rural se caracteriza por un orden específico, establecido dentro del espacio en el cual opera, que utiliza la base de recursos naturales de que dispone; es un modo de vida generalmente articulado a lo urbano, con una organización donde dominan los intereses de los actores rurales dedicados a actividades agropecuarias, que son la base de la generación de ingresos y excedentes. Las relaciones sociales en el interior de estas sociedades tienen como base la producción primaria; pero dentro de la perspectiva de una agricultura ampliada, también dichas relaciones descansan en otras producciones directamente vinculadas a aquella, ya sean de transformación o de servicios. Desde el punto de vista espacial, lo urbano se constituye en el centro administrativo, político y de concentración de servicios de la sociedad rural. Sin embargo, el espacio rural cada vez más se enlaza estrechamente con el espacio urbano en un continuidad que ofrece mayores posibilidades para la solución de los problemas. Por esa razón, las estrategias de desarrollo rural tienen que contemplar tanto lo urbano como lo rural.

El enfoque espacial del DRS no está dirigido, entonces, a conservar y desarrollar sólo los actores considerados estrictamente rurales dentro de una visión tradicional. Por el contrario, dentro del enfoque del DRS se contempla el fortalecimiento de localidades rurales y de las ciudades intermedias como núcleos de irradiación de servicios, a través de los cuales puede mejorar la calidad de vida en el campo. El DRS contempla la organización de una estructura económica, social, institucional y ecológica que brinde efectivamente opciones para agregar valor a los productos, generar nuevas fuentes de empleo e ingresos y crear una base de despegue de actividades urbano - rurales, tanto productivas como de servicios. Los pobladores rurales en general, en especial los pequeños productores y la población en estado de pobreza, deben apropiarse de este proceso para hacerlo sostenible, a través de un continuo desarrollo tecnológico en su sentido más amplio.

La pobreza rural es producto y a la vez causa de los desequilibrios estructurales nacionales. Esto implica que cualquier esfuerzo que se realice para resolver esta situación requiere de un esquema de distribución amplio de los activos, de mecanismos que lleven a la satisfacción de necesidades básicas, de condiciones para establecer un manejo adecuado de la base de recursos productivos y de apoyos para la expresión de las características sociales e individuales de los actores en condición de pobreza. El desarrollo rural, por tanto, debe buscar la creación de condiciones para la diversificación del aparato productivo y de los servicios en la sociedad rural.

Esto significa que la agricultura no es la única actividad a través de la cual pueda superarse la pobreza, y que las estrategias destinadas a enfrentarla deben diferenciar las diversas categorías de pobladores rurales. En efecto, el concepto de sociedades rurales incluye a todos los actores presentes en el espacio rural, y por lo tanto implica que el desarrollo y la superación de la pobreza

requiere de la participación de toda la sociedad. Por ello, aunque el desarrollo rural debe dirigirse, preferentemente, hacia los pobres y los pequeños productores, debe disponer de mecanismos que permitan articularse con los medianos y grandes productores. Con base en esa diferenciación se debe identificar a los pequeños productores que tienen potencial productivo y que pueden vivir dignamente de la agricultura en su concepción ampliada y competitiva, de los que definitivamente deben conseguir sus ingresos en actividades extraprediales en el interior de las sociedades rurales, ya sea por falta de recursos productivos o por otros impedimentos. La diferenciación de las categorìas de pobladores rurales permite también contemplar a algunos sectores que mantienen unidades familiares de subsistencia como complemento a la generación de ingresos por otras vías. Dicha diferenciación, asimismo, debe servir de base para diseñar formas de producción que hagan posible la preservación del medio ambiente.

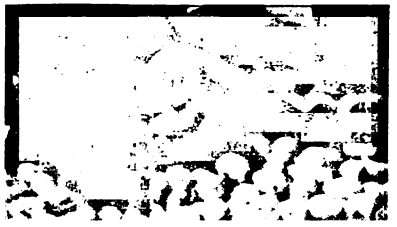
Un componente fundamental de las actividades del Desarrollo Rural Sostenible debe estar constituido por mecanismos y estrategias para que los pobladores rurales organizados y con potencial productivo, puedan tener acceso no sólo a recursos básicos como tierra, crédito y tecnología, sino también a servicios como salud, educación, recreación, cultura, agua potable, vivienda y otros; solamente de esa manera podrán incorporarse a los mercados en adecuadas condiciones de competitividad.
Los habitantes del mundo rural, y los pobres en particular, difícilmente lograrán cerrar la brecha que los separa del resto de la sociedad nacional si continúan actuando solos y atomizados. Individualmente enfrentarán barreras insuperables para acceder a los medios que les permitan generar riqueza y apropiarse de ella, dentro de una perspectiva de sostenibilidad económica y social. Por lo tanto, las opciones viables para alcanzar su desarrollo pasan por la articulación con los otros actores, no sólo para ampliar las posibilidades de relacionarse autónomamente con las instituciones del Estado, sino también para mejorar la gestión empresarial, establecer economías de escala donde el crecimiento sostenible sea mayor.

La aplicación de los conceptos del DRS en la geografía latinoamericana debe reconocer no solamente las diferencias regionales sino también el peso desigual que en la concepción de soluciones se le otorga a problemas similares. Las diferencias entre países y regiones, implica diseñar estrategias distintas de DRS para las diferentes áreas geográficas de América Latina y el Caribe.

Tomando en consideración la definición y los elementos conceptuales del DRS, se concluye que la sociedad rural constituye la población objetivo del desarrollo rural sostenible, es decir, todos los actores que operan en el espacio rural, sin discriminación por sexo, edad o etnia. Es evidente, entonces, que este proceso debe realizarse con la participación de los agentes públicos y privados, es decir, involucrando a todos los actores, fortaleciendo la capacidad institucional y autogestionaria de las comunidades para mejorar su ingreso y condiciones de vida e incorporarse de manera equitativa y sostenible al sistema económico, social, político y cultural. Sin embargo, sin detrimento de lo anterior, sus acciones deben tener como eje el mejoramiento de los pequeños y medianos productores agrícolas y los sectores rurales de población de bajos ingresos.

3

sostenible



El DRS debe visualizarse como un proceso integral, equitativo, sostenible, competitivo y solidario. Esta concepción debe acompañarse de orientaciones que impulsen la igualdad de oportunidades para todas las personas y la sosteniblidad de esas mismas opciones. Estos son principios que cruzan transversalmente todas las acciones de DRS y, consecuentemente, deben expresarse tangiblemente en el diseño de las actividades dirigidas a su logro.

Lo integral se refiere a la capacidad para generar una dinámica acumulativa que aglutine paulatinamente las funciones económicas, los servicios y las actividades vinculadas a la vida nacional dentro de un sistema en permanente transformación, tanto desde el punto de vista ecológico, como económico, social y político. Lo integral no se refiere entonces a la suma de componentes, ni a la capacidad de coordinarlos en la operación de los proyectos específicos. La "integralidad" se alcanza cuando las iniciativas generan de por sí la capacidad de articularse con el entorno regional y nacional, en el ·mbito de una agricultura ampliada.

En general, el desarrollo se hace sostenible cuando el proceso obtiene su propia dinámica y autonomìa en el tiempo, hasta alcanzar los objetivos deseados, manteniendo la capacidad de plantearse nuevos retos y oportunidades para el crecimiento y el bienestar. La sostenibilidad tiene implicaciones diversas en sus dimensiones ecológicas, económicas, sociales, culturales y políticas. La sostenibilidad requiere tener en cuenta las situaciones diferenciadas de los actores, los espacios rurales, los contextos en que actúan y las dinámicas en que están involucrados. No es un criterio de aplicación homogénea: en unos casos requiere combinar crecimiento con políticas compensatorias; en otros con conservación del ambiente y los recursos naturales y a veces, la combinación simultánea de estos aspectos. Y para otros casos requiere el manejo de los antagonismos entre subsistencia y conservación

de los recursos, versus la b squeda de nuevas opciones de empleo e ingresos.

La equidad alude tanto a la satisfacción de las necesidades básicas (derecho al bienestar) como a la participación en la toma de decisiones sobre la distribución del ingreso y del poder. Es decir, el derecho a participar en el ejercicio del poder (empowerment), ejercer liderazgo e influenciar las acciones que determinan el bienestar de las personas. El tema de la equidad está así estrechamente vinculado con el de la participación de todos los miembros de la población (hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos de todas las etnias) en las actividades que tienen influjo sobre su bienestar; en suma, con la ampliación de la ciudadanía de los habitantes del mundo rural.

Este concepto de equidad se aplica no solo a los individuos; incluye a grupos sociales específicos, conglomerados sociales como las localidades, las microrregiones y las regiones, los grupos étnicos y las categorías sociales específicas, como las mujeres y los jóvenes. El DRS busca no sólo eliminar la exclusión económica y social, también los desequilibrios regionales e intrarregionales que generan conflictos y diferencias significativas en los niveles de vida en el interior de una sociedad. El DRS es por naturaleza participativo y busca la autogestión con compromiso social.

Lo competitivo no sólo se refiere a que los productos de los proyectos establecidos dentro de una concepción de agricultura ampliada deben tener éxito en los mercados, como un requisito para generar empleo e ingresos, sino también a que el desarrollo rural debe ser visto como una actividad rentable social y políticamente; una actividad que produce dividendos para la sociedad en general, y por tanto debe invertirse recursos en ella. En ese sentido, el desarrollo rural necesita de acciones positivas destinadas a estimular la inversión pública y privada, a fin de que pueda competir en condiciones de igualdad, en la asignación de recursos con otros sectores productivos. Estas acciones positivas, sin embargo, requieren de un Estado fortalecido y eficiente, que opere dentro de una nueva concepción institucional.

La solidaridad es un principio básico que debe guiar el Desarrollo Rural Sostenible. Consiste en términos prácticos en la organización de los individuos para actuar y participar en conjunto, para compartir y decidir. Las acciones aisladas de individuos y unidades productivas, demandan esfuerzos que son poco eficientes desde el punto de vista del desarrollo. La solidaridad, sin embargo, puede darse entre individuos que se identifican unos con otros, con base en sentimientos de pertenencia a una colectividad que comparte algunos valores y metas. El acercamiento entre los diferentes estamentos de la sociedad rural, y entre ésta y la sociedad nacional, requiere de una ética donde las relaciones económicas y sociales entre individuos y grupos estén mediadas por la transparencia y la concertación de intereses.

genero, **mujer** *y desarrollo rural sostenible*

Uno de los retos más apremiantes del Desarrollo Rural Sostenible es el logro de la equidad social y de género para los diferentes sectores que conforman el mundo rural y el urbano, distinguiendo sus particularidades culturales, étnicas y de edad. Lo cual, necesariamente implica incorporar la perspectiva de género en las políticas, programas y proyectos de desarrollo rural, diferenciando las desigualdades existentes entre mujeres y hombres, y los factores políticos, económicos y culturales que las originan, con el fin de emprender acciones que se orienten al logro de relaciones equitativas entre mujeres y hombres.

Uno de los objetivos del IICA ha sido el desarrollo de acciones a favor de las mujeres rurales y la institucionalización del enfoque de género en el sector agropecuario y rural. Al respecto, a partir de 1990 el énfasis del Instituto se ha acentuado en la ejecución de importantes proyectos hemisféricos, regionales y nacionales, y en investigaciones sobre las polÌticas agropecuarias y su impacto en las mujeres productoras de alimentos en 18 países del hemisferio. Desde ese año se inician acciones en el campo de la comunicación educativa y la mujer rural, que llevaron a la ejecución de un proyecto regional centroamericano

Importantes proyectos nacionales y regionales que incorporan la perspectiva de género o que dirigen acciones específicas a las mujeres, constituyen un acervo significativo que marca una trayectoria de iniciativas que consolidan un desarrollo rural sostenible para las mujeres.

Parte importante de la estrategia de acción en este campo consiste en el establecimiento de alianzas estratégicas y la articulación de esfuerzos con organismos, proyectos y redes nacionales, regionales hemisféricos.

La Junta Interamericana de Agricultura en su Novena Reunión Ordinaria, celebrada en Chile en octubre de 1997, emitió una resolución en la que solicita al IICA impulsar la ejecución de un programa para el fortalecimiento de la participación de las mujeres rurales en las cadenas productivo empresariales, así como la creación de un fondo especial para captar recursos que financien las actividades del programa.

Este mandato lleva a la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible a iniciar dos importantes iniciativas de carácter hemisférico: el Proyecto Género en el Desarrollo Rural Sostenible y el Programa para el Desarrollo Empresarial de las Mujeres Rurales (PADEMUR), con las cuales articula y dirige su acción en torno a la institucionalización de la perspectiva de género y el trabajo específico con mujeres rurales.

institucionalización de la perspectiva de género

Resulta esencial la institucionalización de la perspectiva de género a nivel de políticas, programas y proyectos del Instituto, así como de organismos nacionales y regionales, vinculados al desarrollo rural sostenible, como parte de una acción concertada con el sector público, el privado y la sociedad civil.

La formulación de políticas en materia de género, así como el desarrollo de experiencias piloto, de investigaciones, la formulación de proyectos, la producción de materiales educativos y documentos técnicos, permitirán el desarrollo de iniciativas institucionales que aborden las especificidades de hombres y mujeres rurales, así como de un relacionamiento entre ambos, basada en el respeto, la solidaridad y que esté acorde con nuevos principios de participación, concertación y democracia. Se trata de potenciar la modificación de las relaciones entre mujeres y hombres y cambiar las condiciones de vida de las mujeres rurales, para que el Desarrollo Rural Sostenible tenga un sustento de bienestar y calidad de vida para toda la población.

La tendencia más fuerte en el trabajo en materia de género ha sido la formulación de programas para mujeres que no consideran su papel decisivo en la economía rural o acciones puntuales sin una visión o vinculación estratégica con las políticas del sector. Lo mismo que la puesta en marcha de actividades de capacitación sobre el tema de género que logran ampliar el nivel de conocimiento y sensibilidad del personal, pero que no son suficientes para abordar el proceso de transformación y modernización institucional y programática que implica la institucionalización de la perspectiva de género.

Uno de los retos fundamentales para el trabajo con enfoque de género es la articulación de las acciones dirigidas a las mujeres, con las propuestas globales de desarrollo rural, así como el abordaje de la perspectiva de género como un eje central del desarrollo, más que como actividades agregadas a los procesos de desarrollo rural sostenible.

Como áreas de trabajo indispensables surgen: el desarrollo de estrategias y metodologías para la incorporación de la perspectiva de género al nivel institucional; indicadores y estadísticas con perspectiva de género; la capacitación del personal directivo y técnico que trabaja al nivel de campo o en la formulación o evaluación de proyectos; propuestas de innovación y transferencia tecnológica que, al tiempo que reducen la extensión e intensidad de las jornadas de trabajo de las mujeres, faciliten la redistribución de responsabilidades al interior de las familias rurales, las organizaciones, las comunidades, los espacios laborales, y aumentar la productividad.

Para concretar la incorporación del enfoque de género en las estrategias institucionales, es fundamental considerar además, la asignación de prioridades presupuestarias y revisar la conformación de los equipos de trabajo y la cobertura y organización temática que realizan.

Parte fundamental de la tarea de institucionalizar la perspectiva de género es potenciar un relacionamiento entre las mujeres y los hombres que se traduzca en un fortalecimiento de la participación democrática, de la solidaridad y de la equidad. Significa reconocer que las relaciones existentes entre hombres y mujeres reflejan los valores fundamentales de una sociedad y que es desde los espacios cotidianos, e incluso privados, que se tejen las bases de una sociedad justa e igualitaria.

Mujer y Desarrollo Rural Sostenible

Cada vez es mayor la participación de las mujeres rurales en las actividades agropecuarias y rurales y mayores sus dificultades para acceder a los recursos productivos y a los servicios; por lo que es necesario reconocer los factores que limitan ese acceso para crear las condiciones necesarias para revertir esa tendencia. La orientación es fortalecer la participación de las mujeres en actividades productivas, articulándola al ámbito de las decisiones políticas y económicas.

La necesidad apremiante de elevar el nivel y la calidad de vida de la población rural, pasa necesariamente por reconocer la situación desigual y desventajosa de las mujeres, dada la multiplicidad de actividades que realizan, la falta de acceso a los recursos productivos, a los servicios y a los beneficios del desarrollo.

El reconocimiento de esta realidad específica de las mujeres lleva a la identificación de una línea de trabajo directa con las mujeres rurales, orientada a fortalecer su participación política, social y económica en los espacios local, nacional y regional. Los siguientes son aspectos importantes a considerar al abordar al trabajo con las mujeres:

∞La escasa y deficiente información sobre la participación de las mujeres en la agricultura y en el medio rural, plantea el imperativo de abordar una línea de investigación que aporte información suficiente y pertinente para la adecuada formulación y ejecución de políticas de equidad de género.

∞La potenciación de la participación de las mujeres requiere tanto de la apertura de espacios para su participación al interior de las organizaciones existentes como del fortalecimiento de sus capacidades organizativas y de liderazgo.

∞Fortalecimiento del ejercicio de la democracia a nivel local, nacional y regional. Se parte de la premisa de que para la participación de las mujeres rurales no sólo se abren espacios sino que deben crearse las condiciones para su ejercicio.

∞Las iniciativas de desarrollo pueden contribuir a modificar las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, lo que constituye una de las principales limitaciones para el logro de la equidad, la sostenibilidad y la competitividad del sector rural.

∞Como los proyectos tienen incidencias diferenciadas en las mujeres y en los hombres, dada la participación desigual de unas y otros en las diferentes actividades de la comunidad o la región, es necesario conocer los arreglos existentes en las unidades productivas familiares y en las comunidades en relación con las responsabilidades de las mujeres y de los hombres y medir el efecto del proyecto en esa realidad. Esto es fundamental para poder reconocer los beneficios que conlleva para la población femenina y la masculina.

∞Para esto, las mujeres deben ser reconocidas también desde su rol de productoras, además de su rol en la reproducción y en la gestión comunitaria, de manera que se facilite su participación en los procesos de dinamización y modernización de la economía rural.

∞La problemática de las mujeres rurales está fuertemente relacionada con la pobreza. La inserción de las mujeres rurales y agrícolas en la producción es estructural y permanente. Por ello, es fundamental comprender su situación y condición de género para lograr la modernización y diversificación del sector rural. De manera que la solución no radica en el impulso de políticas asistenciales dado el vínculo con la pobreza, sino el impulso de políticas integrales.

∞Dado que las formas de participación de las mujeres y de los hombres son diferentes, se deben generar medios alternativos y complementarios para que la población participe en la toma de decisiones económicas, políticas y sociales.

∞Otra dimensión indispensable es facilitar las condiciones para que la mujeres puedan construir sus propios espacios de relacionamiento y en los que pueda integrar a la identidad de madre, la identidad de trabajadora y de gestora del desarrollo rural.

∞Fortalecer la identidad de las mujeres rurales para que ejerzan sus derechos a acceder a diferentes recursos productivos y a participar con criterio e intereses propios en la distribución de los beneficios sociales y económicos de la producción agropecuaria.

∞Diseñar la aplicación de estrategias de capacitación personalizadas y metodologías adecuadas, que aprovechen las experiencias de personas y organizaciones que trabajan a favor de la igualdad y la equidad, y que fortalezcan la capacidad institucional de los hombres y de las mujeres para impulsar diversas iniciativas de producción y empleo sustentadas en la equidad y que permitan satisfacer las necesidades diferenciadas de la población involucrada.

∞Crear condiciones para la participación de las mujeres rurales en las diversas instancias políticas, económicas y organizativas significa, en gran parte, fortalecer el desarrollo humano de las mujeres en términos de autoestima, destreza y capacidad de liderazgo. Pero además una modificación de las prácticas organizativas, de manera que se ajusten a la experiencia de las mujeres y a sus intereses y prioridades.

∞Incorporar los intereses y necesidades de las mujeres se traduce en propuestas incluyentes, representativas, democráticas, viables y que beneficien al conjunto de la población rural, a las mujeres y a los hombres. Al potenciar la participación de las mujeres en las decisiones y en la gestión del desarrollo, se garantiza la representatividad y la viabilidad de las propuestas de desarrollo.

∞La influencia que tienen las mujeres sobre la modificación de las condiciones de vida de sus familias hace que un mayor acceso a los servicios básicos se traduzca en el aumento del bienestar y la calidad de vida de las familias rurales.

∞En las nuevas formas de articulación de la sociedad civil, el Estado y el sector privado debe garantizarse tanto la representatividad de la participación de las mujeres como la incorporación de sus intereses y necesidades específicas como prioridades del desarrollo rural.

∞Eliminar la segmentación de los espacios de participación en donde se da una mayor participación de los hombres en las organizaciones gremiales, políticas y económicas, mientras que las mujeres se concentran en grupos y organizaciones de carácter social.

∞La concertación y la búsqueda del consenso entre las prioridades identificadas por los hombres y las mujeres deberá promoverse como parte de un ejercicio esencial de convivencia democrática. El logro de un desarrollo sostenible depende en gran medida de la capacidad para articular a todos los actores sociales involucrados, atender sus necesidades y distribuir equitativamente los beneficios económicos y políticos entre mujeres y hombres.

juventud y desarrollo rural sostenible en el marco de la nueva ruralidad

En el trabajo con la juventud rural de América Latina y el Caribe, el IICA posee una larga y valiosa experiencia. El desarrollo de programas especialmente dirigidos a la juventud, así como la organización de actividades para promover la participación juvenil, ha permitido al Instituto acumular conocimientos y vivencias. De 1965 a 1972 se desarrolló el Programa Interamericano de Juventud Rural (PIJR); en 1973, junto con la FAO, se propuso el Marco Orientador para el Trabajo con Juventudes Rurales; en 1975 se creó la Secretaría Interamericana de Juventudes Rurales (SIJUR) y se apoyó el establecimiento del Consejo Asesor Iberoamericano de Juventudes Rurales (CAJIR). El IICA además ha impulsado la creación de empresas juveniles de producción y junto con el BID ha promovido el acceso al crédito por parte de los jóvenes rurales. En el Plan de Acción 1994 - 1998, uno de los objetivos señalados ha sido el impulso a la participación juvenil. Dentro de ese marco, se promovieron en 1995 encuentros subregionales sobre juventud rural en Montevideo, Santo Domingo y Quito, y en ese mismo año se organizó la Consulta Interamericana sobre Juventud Rural, con el apoyo de la Fundación Kellogg.

En la actualidad el IICA tiene un mandato específico emanado de la Novena Reunión Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura, que se celebró en Chile en octubre de 1997: el impulso de un programa de juventudes rurales que incentive la participación de los jóvenes en la economía del medio rural, con la colaboración de otros organismos internacionales, agencias multilaterales y contrapartes nacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, para sustentar los componentes técnicos y financieros. El Tercer Foro Iberoamericano de Agricultura, celebrado en Portugal en agosto de 1998, incluyó en su Plan de Acción una propuesta del IICA para impulsar un Programa de Formación de Jóvenes Agroempresarios de América Latina y el Caribe, y la constitución del Consejo Internacional de Jóvenes Agroempresarios (CIJA).

Aunque la información desagregada disponible en censos, estadísticas y documentos oficiales es escasa, la experiencia acumulada por el IICA a lo largo de todos esos años permite adelantar algunos elementos de diagnástico sobre la situación actual de la juventud rural:

∞A pesar de los esfuerzos iniciados en 1985, Año Internacional de la Juventud, en la formulación de polÌticas públicas dirigidas a la juventud, persiste una situación de invisibilidad de la juventud rural, especialmente en lo que significa su aporte en la producción y su potencial en ese plano.

∞La carencia de oportunidades para el desarrollo personal y el mejoramiento económico y social, sigue provocando un importante flujo migratorio de los jóvenes hacia las zonas urbanas.

∞A pesar de que se ha observado una mejoría en el acceso de los jóvenes rurales a la educación, aún siguen estando en desventaja con relación a los jóvenes urbanos en cuanto a posibilidades para finalizar su educación primaria y secundaria. Además, la calidad de la enseñanza formal en escuelas y colegios rurales es generalmente inferior a la de los establecimientos urbanos.

∞Los jóvenes tienen un limitado acceso al crédito y a los activos productivos, incluyendo la tierra.

∞Los elevados niveles de violencia e inseguridad ciudadana afectan de manera muy especial a los jóvenes de las zonas rurales, que muchas veces se ven mezclados en edades muy

tempranas en los movimientos insurgentes de base rural o en el tráfico de drogas y otras actividades de índole delictiva.

∞Existe una tendencia acusada a la hora de formular políticas públicas, de considerar a la juventud como el potencial del futuro y no como uno de los desafíos del presente.

∞En general la juventud rural carece de formas de asociación que le permita tomar consciencia de sus derechos como ciudadanos y como actores sociales.

Las estrategias basadas en el planteamiento del Desarrollo Rural Sostenible deben contemplar no solamente la situación de los jóvenes rurales en sus diferentes manifestaciones, sino también tomar en cuenta su potencial en términos de modernización del mundo rural, no tan sólo en los aspectos relativos a la producción, sino que en todo lo que tiene que ver con el ejercicio de una ciudadanía consciente y activa, deseosa de aprovechar y ampliar los espacios de participación democrática. Dentro de la visión del DRS el trabajo con la juventud rural no es simplemente una actividad destinada a evitar la exclusión de este importante sector de la población, sino que es consustancial al planteamiento mismo, puesto que en los tiempos actuales la juventud está llamada a convertirse en un actor clave del desarrollo local.

Los programas destinados a abrir oportunidades de educación, empleo y, en general, mejores condiciones de vida para los jóvenes, deben tomar en cuenta el hecho de que la población juvenil del mundo rural no es homogénea en cuanto a edad, procedencia social, situación económica y orígenes étnicos. Los jóvenes de los estratos socioeconómicos más bajos tienen menores posibilidades de acceso a recursos económicos y culturales; siendo la situación aún más difícil para las mujeres, para los jóvenes que se ubican en los tramos inferiores de edad, para aquellos que viven en zonas donde los servicios son escasos o inexistentes, y para los que pertenecen a etnias culturalmente marginadas.

La comprensión de las diferencias específicas existentes en la población joven del mundo rural es un elemento clave dentro de la búsqueda de alternativas para enfrentar su compleja situación actual. De igual forma, debe admitirse que la búsqueda de soluciones no puede hacerse desvinculada de un planteamiento que no contemple el mundo rural en su totalidad. En ese sentido, las soluciones tienen que reflejar una articulación con los temas de productividad, competitividad, generación de empleo, redistribución de ingresos y flujos migratorios. Pero también deben contemplar las legítimas aspiraciones de la juventud rural en cuanto al acceso a ciertos servicios y bienes provenientes del mundo urbano. El gran reto en este plano consiste en la preservación de un patrimonio cultural y una identidad local o regional, sin que ello implique el aislamiento o la negación de los beneficios que también entraña la modernidad, sobre todo dentro de un contexto nacional e internacional de globalización y de acelerado acercamiento entre el mundo rural y el urbano. Finalmente, el aspecto recreativo no puede estar ausente en los planteamientos dirigidos hacia los jóvenes rurales.

Conforme el mundo rural se moderniza, aparecen diversas interconexiones entre la actividad agropecuaria, los servicios y las actividades productivas no agrícolas. Se abren así nuevas posibilidades de empleo, que demandan conocimientos y destrezas que los jóvenes rurales tendrán que adquirir y desarrollar para estar en capacidad de participar con fluidez dentro del conjunto sistémico. Las instituciones educativas en el medio rural deben seguir un enfoque centrado en la formación de capital humano, lo que significa un nivel de conocimientos que facilite la integración de los jóvenes tanto dentro de los diferentes eslabones que forman la cadena agroalimentaria, como en los servicios y otras actividades productivas que no forman necesariamente parte de ella, pero que se realizan en el medio rural. Implica además el desarrollo de destrezas flexibles y reprogramables, así como programas continuos de capacitación, que faciliten las adaptaciones que demandará en el futuro el acelerado proceso de cambio del mundo rural. Especial atención debe colocarse en el desarrollo de la capacidad de los jóvenes tanto en el terreno empresarial, como en el de manejo sostenible del medio ambiente.

temas prioritarios

Dentro de la concepción de Desarrollo Rural Sostenible enunciada, tienen cabida la mayoría de los temas que se consideran como retos en las zonas rurales de América Latina y el Caribe. Sin embargo, para alcanzar el liderazgo en la temática, el IICA debe hacer un gran esfuerzo para establecer prioridades y precisar sus focos de atención. De esa forma se logrará conformar una oferta técnica con un alto nivel de excelencia, que se refleje en proyectos específicos que ilustren el manejo técnico de los problemas y generen metodologías adaptables a las diferentes realidades regionales que el Instituto ha logrado identificar.

En consecuencia, se propone una estructura temática sistémica compuesta por tres grandes bloques: generación de empleo, ingresos y capitalización de excedentes; construcción de la nueva institucionalidad, y desarrollo del hábitat rural y la sostenibilidad del medio. En cada uno de ellos se señalan aspectos sobre los cuales se debería enfocar la atención, dependiendo de los énfasis regionales y de los intereses de los países; aspectos que pueden conducir a la formulación de proyectos específicos dentro de las sociedades rurales. En la medida en que conforma un sistema, los temas prioritarios se complementan entre si, dentro de una jerarquía que, partiendo de políticas diferenciadas, se manifiesta en niveles operativos que conforman una plataforma de prueba y ajuste, con mecanismos para alcanzar la participación permanente de los diferentes actores presentes en las sociedades rurales.

empleo, ingresos y capitalización de excedentes

Dentro de este aspecto se incluyen acciones que buscan estimular el desarrollo de conceptos, métodos de trabajo y propuestas que puedan influir en el diseño de políticas, programas y proyectos dirigidos a generar empleo e ingresos, y a canalizar iniciativas de los pequeños y medianos agricultores, con el propósito de crear mecanismos de formación y capitalización de excedentes a partir de actividades empresariales competitivas. Acciones que aseguren una inserción eficaz de estos grupos dentro de la economía de los países.

A fin de coadyuvar en el combate a la pobreza y mejorar el empleo productivo de los recursos naturales, es necesario crear y fortalecer microempresas y pequeñas empresas de producción, y servicios que generen capital y empleo directo. Eso implica, por un lado, mejorar las posibilidades de acceso de los pobladores de las áreas rurales a recursos económicos y tecnológicos, tanto del sector público como del privado y por otro, diseñar servicios de asistencia, información y gestión (incluyendo centros de información y capacitación en gestión empresarial), a fin de que las empresas de pequeños productores puedan participar competitivamente en los mercados de insumos, de productos y de servicios. Es necesario alcanzar una mayor vinculación de la pequeña agricultura con las cadenas agroalimentarias y con la industria no agrícola, así como el acceso a mercados de productos y servicios de alta rentabilidad. Dentro del fomento de las iniciativas empresariales debe contemplarse la participación de los jóvenes rurales de ambos sexos, con el fin de que se capaciten en la utilización productiva de los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad.

Estas acciones deben estar apoyadas en estudios e investigaciones sobre las comunidades rurales y los nuevos sujetos y actores del DRS. Cabe mencionar, estudios sobre la composición del ingreso de las familias rurales en el nuevo contexto rural - urbano, y so-

bre las formas y demandas actuales de desarrollo empresarial de los productores, incluyendo las variables de mercadeo, transferencia de tecnología e inserción en cadenas de procesamiento agroindustrial. Además, se debe contribuir al establecimiento y mejoramiento de la seguridad jurídica de los agricultores, incluyendo el funcionamiento legal de los sistemas de tenencia de tierra, y de los programas y acciones que impulsan a los sistemas de mercados de tierras.

Dentro de estos esfuerzos es primordial alcanzar una coordinación entre los organismos nacionales e internacionales con el fin de establecer planes de inversión y realizar acciones complementarias que contribuyan a la formación de capital, generación de empleo y a la disminución de los costos de transacción y reducción de los niveles de riesgo.

6.2 construcción de la nueva institucionalidad

Las acciones señaladas bajo este rubro están dirigidas a apoyar a los países en la tarea de crear una institucionalidad inteligente, ágil y eficiente, capaz de estimular a los actores de las sociedades rurales para que participen en la definición y puesta en marcha de su propio proceso de desarrollo sostenible, y de acompañarlos en su evolución. Comprende además los esfuerzos requeridos para sentar las bases de la equidad, así como el acceso a servicios eficaces de apoyo, que tengan la capacidad de vincular los actores con menor desarrollo relativo a las actividades productivas competitivas; igualmente a los sistemas de organización y a las instancias participativas, a través de las cuales se expresan los procesos de democratización e integración social, dentro de un esquema de solidaridad y desarrollo humano.

El diseño, formulación y aplicación de políticas, programas y proyectos para impulsar el DRS debe responder a las necesidades de los pequeños y medianos actores de las sociedades rurales en las diferentes regiones de América Latina y el Caribe. Necesidades que tienen que ver con las dimensiones económico - productivas, socio - culturales, político - institucionales y ambientales. El IICA debe apoyar a los Ministerios de Agricultura y a las entidades especializadas del sector público, para que introduzcan cambios en la forma en que dichas instancias se relacionan con los habitantes del mundo rural. La verticalidad tradicional presente debe ceder su lugar a relaciones más horizontales con los individuos y grupos.

Es igualmente importante el respaldo a la organización e integración de los pequeños y micro productores, en instancias democráticas y participativas, eficaces para el diálogo con otros interlocutores y para el desarrollo de iniciativas y demandas. Los procesos de desarrollo local que cuentan con una participación amplia de la sociedad civil deben incluirse dentro de estos esfuerzos, así como el fortalecimiento de los gobiernos locales y la promoción de espacios de concertación entre instituciones públicas y privadas, con las organizaciones de los pequeños y medianos productores.

Una mayor participación en la toma de decisiones por parte de los pequeños y medianos productores, requiere del establecimiento y fortalecimiento de sistemas de información y de comunicación, incluyendo, con particular énfasis, el acceso y la operación de sistemas informáticos y el funcionamiento de redes y enlaces virtuales. La sistematización de experiencias exitosas, así como las acciones de asistencia técnica horizontal, incluyendo los intercambios y la participación activa de los sujetos en las tareas de cooperación, puede ser de enorme ayuda dentro de ese proceso. Asimismo el apoyo a la constitución y operación de Fondos Regionales para impulsar las áreas estratégicas prioritarias para el Desarrollo Rural Sostenible.

Otras acciones tienen que ver con el impulso a la formulación y aplicación de estrategias y acciones regionales en DRS, comprendiendo a países con desafíos y problemas comunes. También el estímulo a la formación de Comités Consultivos para el Desarrollo Rural Sostenible, tanto en el plano hemisférico como en el regional, que funcionen como organismos asesores del Instituto, contribuyendo de esa manera a su replanteamiento político - técnico en los niveles nacionales e internacionales.

hábitat rural y sostenibilidad del medio

Este tema se concentra en la formulación de políticas y en el diseño de programas de mediano y largo plazo, tendientes a racionalizar el uso de los espacios geográficos, la organización funcional de las unidades regionales, el manejo de los recursos productivos, la formación de los recursos humanos y la calidad de vida de las sociedades rurales, en una combinación con acciones determinadas a aliviar la pobreza rural y a insertar en la economía de los países los grupos relativamente marginados.

Una efectiva política destinada a impulsar el DRS requiere de la identificación de espacios geográficos menores; el manejo de cuencas, micro cuencas y espacios para la producción y transformación agropecuaria o venta de servicios, tales como el turismo rural o medio ambiental. Especial énfasis debe colocarse en la promoción de las iniciativas de las comunidades y los organismos locales descentralizados, como los municipios y otras entidades, destinadas a la identificación de estrategias para el manejo de recursos naturales, que aseguren la preservación del medio ambiente y la sostenibilidad, y contribuyan significativamente a la disminución de la pobreza

También las comunidades indígenas deben ser apoyadas para que participen en el desarrollo de iniciativas generadoras de ingreso, sobre la base de la gestión empresarial de sistemas de agricultura y de Desarrollo Rural Sostenible.

institucionalización del enfoque de género

Las medidas en los tres bloques señalados, deben ir acompañadas de acciones positivas para alcanzar la equidad de género en el Desarrollo Rural Sostenible. Acciones destinadas al fortalecimiento de la organización de las mujeres rurales, en los niveles nacional y regional; al planeamiento y desarrollo de proyectos en aspectos relacionados con la integración de las mujeres rurales a las cadenas productivo empresariales y a la ejecución de investigaciones sobre temas relacionados con el papel de las mujeres en el agro, cuyos resultados sirvan para la toma de decisiones a la hora de plantear políticas específicas.

Los proyectos de carácter empresarial que se promuevan en las comunidades rurales deben contemplar la participación de mujeres y hombres, en términos de igualdad de oportunidades. Sin embargo, dado el peso de la socialización en la conformación de los roles masculinos y femeninos, el logro de una mayor equidad de género es una tarea difícil. En ese sentido, es necesario desarrollar campañas y programas de capacitación para provocar una especie de resocialización de mujeres y hombres en el ámbito rural.

Los programas y proyectos en ejecución deben revisarse y adecuarse, introduciendo y fortaleciendo el enfoque de equidad de género. La capacidad técnica del IICA en estos temas debe incrementarse, a fin de que sus programas y proyectos contemplen dicha perspectiva. En ese sentido, sería deseable que el personal de la Institución, así como sus contrapartes gubernamentales y no gubernamentales, alcanzara un mayor conocimiento y manejo de estos temas, lo que implica una política institucional específica de formación y capacitación. Especial apoyo debe darse a la actualización de los programas de extensión universitaria dirigidos a mujeres rurales. Finalmente, debe promoverse la construcción de sistemas de información integrados sobre el mundo rural, con indicadores y datos desagregados de género.

technical consortium

THIS DRAFT DOCUMENT IS MADE FOR 50 COPIES ONLY. MISTAKES SHOULD BE PROPERLY CORRECTED.

Sustainable Rural Development

and IICA's Technical Cooperation:

Value and Relevance

current challenges:

opportunities

In recent decades, a number of socioeconomic and political changes that have taken place in the international context make it necessary to re-think the underlying concepts and the objectives of development. The effects of the phenomenon of globalization, spurred on by advances in information technologies, are being felt around the world. It has led to the integration of financial markets and the opening of economies around the globe, and has had sociopolitical and cultural impacts. In recent analyses, less attention is paid to these impacts than to the transformations of the economy, perhaps because it is here where the changes are most visible and spectacular.

Despite the unequal and partial articulation of their economies with the world market, the countries, even the least industrialized ones, find themselves in a highly competitive atmosphere, which has had a major impact on the role of the state and on social relations. As a result of trade and financial opening, which has become an essential part of the new strategy for development, the state no longer plays such an important role in the economy; public spending, especially on social programs, has been reduced; and state institutions have been restructured. These changes had a major impact on certain production sectors, causing the cancellation of projects and programs. In particular, the production of traditional agricultural products, especially those destined for domestic markets, has been seriously affected, resulting, in many cases, in a lower quality of life for the rural population.

Paradoxically, in many countries of the region, these internal transformations occurred within a context of democratic opening.

The impact of all these changes on the rural areas of Latin America and the Caribbean has been so great that, today, these areas are viewed in a broader sense, in terms of the actors involved and their interaction with the social contexts in which they live and work. In the past, rural societies produced basic foodstuffs for the domestic market and raw materials for industry and export. This pattern was altered by globalization, which has fostered the diversification of production, especially for external markets. The isolation which characterized rural areas in the past is slowly disappearing; the barriers between rural and urban areas are becoming blurred, facilitating exchanges between them and enabling each to influence the culture, economy, social relations and politics of the other. The two areas have become so intertwined that they form a sort of continuum. This new vision of rural life opens up opportunities and poses challenges related to solving a number of both old and new problems.

According to data from CELADE (1995), in 1995, the population of Latin America stood at 467.3 million, 74% of which lived in urban areas. In contrast, the percentage of inhabitants living in rural zones had been declining steadily, dropping from 43% in 1970 to 26% in 1995. This decline can be attributed not only to migration from the countryside to big cities, but also to the fact that inhabitants of rural areas increasingly prefer to live in towns or small cities, modifying substantially the relationship between city and countryside. Recent studies on Latin America and the Caribbean (CELADE/IDB, 1996) show that migration from rural to urban areas, in general, is on the decline. It continues to be an important phenomenon in countries in which the urbanization process has not been under way for very long; however, in countries in which the urbanization process is well advanced and the population is heavily concentrated in certain areas, most migration takes places between urban spaces, with large cities giving way to medium-sized cities as the preferred destination.

Also, the number of poor living in urban areas increased greatly between 1980 and 1997 (ECLAC, 1997). In rural areas, poverty increased more slowly. However, comparatively speaking, a larger proportion of the population was poor. In countries such as Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Venezuela, more than 66% of rural households could be classified as poor; in Brazil, Colombia, El Salvador, Mexico, Panama, Paraguay and Peru, this percentage ranges between 34% and 66%, and was lower only in Argentina, Costa Rica, Chile and Uruguay (IDB, 1998b). In 1997, the population living in poverty remained the same: approximately 150 million Latin Americans (IDB, 1998a). Social inequality in this region, where the distribution of wealth is more disparate than in any other region of the world, rather than decreasing, increased in many cases, with the poorest 20% receiving 3% of total income, and the upper 20% receiving 60%. As a consequence, the disintegration of society has increased in the region.

According to the "Informe de la Comision Latinoamericana y del Caribe sobre el Desarrollo Social" (1995), poverty affects women proportionally more than it does men. Women generally belong to low-income groups because of existing inequities in terms of employment, and because of difficulties in obtaining necessary production resources: land, credit, technical assistance and inputs. The difficulties experienced by women have a major impact on the population as a whole, especially because many women are heads of household. According the aforementioned report, 20% of the households in Latin America and the Caribbean are headed by women.

In some of the countries of Central and South America, rural poverty seems to be closely related to the existence of large indigenous populations, located both in the highlands and in areas where the agricultural frontier is being expanded. In addition to living in poverty, these populations face different types of exclusion and discrimination, thus complicating the situation even more. In general, their living conditions are worse than those of other rural poor, inasmuch as they suffer from racial discrimination, they have been cut off from their ancestral lands by non-indigenous settlers, and their access to public services such as education and health, as well as to the conveniences of modern life, is limited.

In recent years, the model based on the market as the only entity responsible for giving direction to and regulating the allocation of resources has had to be adjusted in light of new realities. Not only did this model not meet the demands of the poor, also the economy did not perform as expected. Even though the average rate of inflation fell, exports grew and the public-sector deficit was reduced in most of the countries of Latin America and the Caribbean, in most cases, growth rates never reached the levels of the 1970s and 1960s. According to ECLAC (1998), between 1990 and 1996, the average rate of economic growth for the region was 3.1%.

At the Summit of the Americas (April 1998), participants debated the results of economic reforms and recognized that the effective intervention of the state was indispensable in societies suffering from serious social inequalities, and that its actions must complement the market if the goal was to achieve balance social development. The Heads of State gathered at the meeting stated unequivocally that the elimination of poverty was still the greatest challenge faced by the region, and demanded the elimination of the barriers that impede the access of the poor to proper nutrition, social services, a healthy environment, credit and legal title to their land.

However, in order to solve the problems facing their agricultural sectors, the countries of Latin America must adopt a long-term vision calling for the state to continue to take action, through specific government programs, and for civil society to undertake initiatives. The presence of democratic regimes in the region, together with the changes brought about in state institutions, has opened up opportunities for society to participate in political decision-making processes; these new opportunities for participation can be used to promote joint actions aimed at meeting the demand for greater production and a more equitable distribution of wealth.

Given these challenges, it is necessary to formulate sustainable rural development (SRD) policies and strategies for articulating rural and urban areas and undertaking processes aimed at:

∞Reducing poverty, with a view to ensuring social equity. According to ECLAC, rural poverty dropped a mere 1%, from 56% to 55%, between 1990 and 1994, and rural indigence held at 33% during the same period. It is estimated that some 73.9 million people live in poverty in the rural areas of Latin America and the Caribbean, with most of them, 46.4 million (ECLAC, 1997), living in indigence. These staggering statistics reflect a situation that demands the immediate formulation of a long-term vision, and the translation of same into lasting policies aimed at reducing poverty.

∞Creating incentives, support systems and effective assistance aimed at increasing productivity in the agricultural sector. It is necessary to develop mechanisms that will enable small- and medium-scale farmers to achieve the levels of competitiveness required by current market conditions, to add value to their products, to generate surpluses and obtain the means for capital formation. Also, it is essential to develop markets in rural areas, integrated with the agroindustrial and services sectors, and to generate other types of agricultural and non-agricultural employment in rural areas.

∞Diminishing the spatial imbalances and the gap between urban and rural areas. The concentration of the population in some regions of Latin America and the Caribbean, current migration patterns and the unacceptable living conditions in rural areas are some of the problems that perpetuate the inequalities and differentiation that hinder sustainable development.

∞Strengthening and fostering democracy and harmonious social relations. Democracy and equitable SRD are closely related. The different social actors must learn to live and work together, with a view to reconciling their different interests and reaching agreement by consensus. In this regard, it is essential to promote the organization of the poor in rural zones, so that they can negotiate with the state and civil society under conditions that will further their interests and ideals.

∞Achieving sustainable growth with governability and equity. States must be capable of formulating socioeconomic policies and applying instruments that will make it possible to solve conflicts of interest among the different social groups. This type of growth requires also demands the formulation and execution of policies intended to reduce the concentration of wealth, which gives rise to injustices and exacerbates social conflicts.

∞Creating and developing institutions. The growing participation of social organizations in rural development activities demands the existence of state institutions that can provide necessary support. This implies, on the one hand, redefining the roles of the public and private sectors, and, on the other, transferring the power to make decisions regarding development actions to the regional and local levels.

∞Eliminating legal and juridical obstacles that prevent the population for acquiring goods and services. Access to goods and services provided by the public or the private sector is directly related to poverty levels.

∞Laying the foundation for the development of instruments governing the use and management ecologically fragile zones in rural areas. Given current rates of deforestation, the loss of soil and sources of water, and the existence of environmental contamination of different types, immediate and effective corrective actions must be taken in most of the countries of the region.

∞Promoting the access of rural women to goods and services and to the benefits of development (recreation, personal development, participation, etc). According to the United Nations, in developing countries, women make up 67% of the work force and produce more than 55% of all food (1995). In Latin America and the Caribbean, the participation of women in the work force in the rural sector has been on the rise. Some examples cited by ECLAC (1996) confirm this growth: in Brazil, the participation of women in economic activities in rural zones reached 41% at the beginning of the present decade; in Chile and Guatemala, 19%;

in Costa Rica and Honduras, 28%; in Mexico, 26%; in Panama, 24% and in Venezuela, 23%. It is possible that these statistics may not reflect the full extent of the feminization of agriculture, given the biases that come into play in the gathering of data. In any case, rural women do not have equitable access to land, credit, capital and extension services, despite the fact that it is they who most use soil, water and forest resources to ensure the survival of their families and provide supplementary income.

∞Improving the access of the indigenous population to goods and services. Even though much of the indigenous population has been forced to abandon rural areas and move to cities, many remain, especially in Mesoamerica and the Andean highlands. Indigenous peoples make up most of the rural population in several Latin American countries, but their access to land, credit and services continues to be limited. Any SRD policy adopted in these countries must consider ethnic differences, with a view to striking a balance between the need for modernization and respect for ancestral values and ecologically sound agricultural practices that preserve the environment. Similar treatment should be given to other groups who, in some countries, suffer from social and cultural exclusion due to their ethnic origin.

∞Creating conditions that will favor the involvement of rural youths in production activities, and their participation in efforts to lay the foundation for expanded citizenship. Young people make up a very important segment of the rural population in Latin America. According to data from CELADE (1995), in 1995, the rural population between 12 and 24 years of age was 30.2 million. Even though a slight reduction in this number is foreseen for the year 2000, young people still constitute some 23% of the rural population of the region (Dirven, 1995). The rural sector, as it is currently structured, does not offer young people many incentives in terms of work or the prospect of improving their status and the quality of their lives. Employment opportunities in agriculture and livestock breeding are limited, and generally poorly remunerated. Many young people seek new horizons in cities, but many stay in the countryside. Even though studies indicate that rural youths, in general, are more educated than their parents, much work still needs to be done in this area. The rapid changes taking place in the rural world are opening up new possibilities for employment in an expanded agriculture sector and in the services sector. However, rural youths will have to acquire new knowledge and skills if they are to find work. Therefore, educational institutions in rural areas must modify the approach they have been using, and ongoing training programs must be developed to address topics related to production, citizen participation and the preservation of identity. Opportunities for business development must also be generated, which will require access to credit and other production resources.

∞Generation of income, surpluses and capital, and their equitable distribution. The elimination of poverty demands not only the creation of the conditions necessary for the generation of income and capital, but also the existence of mechanisms for the equitable distribution of income among the rural population.

∞Human development. If development is to be sustainable, the men and women who make up rural societies must have opportunities for personal development. This demands a reassessment of social capital and cultural, ethic and gender-related diversity. The goal is to promote sustainable rural development that is based on and aims to strengthen the capabilities of human beings.

A rural society is characterized by a specific order, established within the space in which it operates, and uses the natural resource base available to it; it is generally linked to urban life, and organized around the interests of the rural actors involved in agricultural activities, who are the basis of the generation of income and surpluses. Social relations within these societies are based on primary production. However, within the concept of expanded agriculture, such relations are also based on other types of production directly related to the former, be they processing or services. In spatial terms, cities become administrative and political centers and the source of services for rural society. However, rural and urban areas are becoming increasingly intertwined, within a type of continuum that offers greater possibilities for finding solutions to problems. Therefore, rural development strategies must take urban and rural areas into consideration.

The spatial approach to SRD is not aimed, then, at developing only those actors traditionally considered rural. To the contrary, SRD involves the strengthening of rural towns and the medium-size cities that provide services which can contribute to improving the quality of life in the countryside. SRD encompasses the organization of an economic, social, institutional and ecological structure that offers effective options for adding value to products, generating new sources of employment and income, and providing a foundation for urban-rural activities in both the production and services sectors. Rural inhabitants in general, and small farmers and the poor in particular, must take over this process and make it sustainable by continually adopting new technology.

Rural poverty is both a product and cause of structural imbalances at the national level. This means that any effort made to resolve this situation must offer a system for the broad distribution of assets, mechanisms for the satisfaction of basic needs, the conditions required for the proper management of production resources, and assurances that the social and individual characteristics of the poor will be respected. Rural development, therefore, must be aimed at creating conditions that will allow for the diversification of the production apparatus and services in rural areas

This means that agriculture is not the only activity through which poverty can be overcome, and that strategies aimed at eliminating poverty must differentiate among the categories of rural poor. Indeed, the concept of rural societies includes all the actors present in rural areas, meaning that development and the elimination of poverty require the participation of all members of society. Therefore, even though rural development should be directed preferably toward the poor and small farmers, it must offer mechanisms that will make it possible to establish linkages with medium- and large-scale farmers. With this differentiation in mind, it is necessary to distinguish between those small farmers with production potential and who can earn a living in an expanded and competitive agricultural sector, and those who must definitely generate income from off-farm activities because they lack production resources or face other impediments. This differentiation of categories of rural inhabitants also makes it possible to consider those sectors in which families engage in subsistence farming as a complement to the generation of income by other means. This differentiation should also serve as the basis for designing types of production that will contribute to the preservation of the environment.

SRD must activities must offer mechanisms and strategies that will enable rural inhabitants who are organized and have production potential to gain access not only to basic resources such as land, credit and technology, but also to services such as health, education, recreation, culture, potable water, housing and others. If such resources and services are not available, these inhabitants will not be able to penetrate markets and compete.

Rural inhabitants, especially the poor, will not be able close the gap that separates them from the rest of society unless they stop acting alone. Acting alone, they will face insurmountable barriers in accessing the means they need to generate and appropriate the wealth, within a perspective of economic and social sustainability. Therefore, if they are to achieve an acceptable level of development, they must establish linkages with other actors, not only with

a view to being able to act autonomously in dealing with state institutions, but also to improving their business management skills, establishing economies of scale and entering the market at levels where sustainable growth will be greater.

In applying the concepts of SRD throughout Latin America, consideration must be given not only to regional differences, but also the unequal weight attached to similar problems in the design of solutions. Given the differences among countries and regions, it is necessary to design differentiated SRD strategies for the different geographic areas of Latin America and the Caribbean.

Taking into consideration the definition and the conceptual elements of SRD, it can be concluded that the target of same is rural society; that is, all the actors working and living in the rural sector, regardless of sex, age or ethnic origin. Obviously, then, this process must be carried out with the participation of public and private agents; that is, involving all actors and strengthening the institutional and self-management capabilities of the communities to improve their incomes and living conditions and join the economic, social, political and cultural system on equal footing. The above notwithstanding, the fundamental objective of SRD actions must be to improve the lives of small- and medium-scale farmers and the rural poor.

# of sustainable rural development

3

SRD must be visualized as a comprehensive, equitable, sustainable, competitive and solidary process. This vision must be accompanied by guidelines that promote equality of opportunities for all people, and the sustainability of such opportunities. These are principles that cut across all SRD actions and, as such, must be expressly incorporated into same.

If the process is to be comprehensive, it must gradually bring together from both an ecological and an economic, social and political point of view, economic functions, services and other activities of national life under an ever-changing system. The process is not comprehensive because it is the sum of its components, or because it makes the coordination of these components in the execution of projects possible. "Comprehensiveness" is achieved when the initiative, on their own, are capable of establishing linkages with the regional and national context, within the context of an expanded agricultural sector.

In general, development becomes sustainable when the process takes on a life of its own and becomes autonomous, until the desired objectives have been achieved, while maintaining the capability to pose new challenges and opportunities for growth and well-being. Sustainability has different implications in its ecological, economic, social, cultural and political dimensions. In the search for sustainability, consideration must be given to the differences between actors, rural spaces, the contexts in which they act and the activities in which they are involved. It cannot be applied across the board. In some cases, it is necessary to combine growth with compensatory policies; in others, with conservation of the environment and natural resources; and in others, it is necessary to combine these aspects simultaneously. In other cases, it is necessary to manage the antagonism between subsistence and conservation of resources, and the search for new options for employment and income.

Equity refers to both the satisfaction of basic needs (right to well-being) and to participation in decision making related to the distribution of income and power; in other words, the right to participate in the exercise of power (empowerment), to exercise leadership and to exert influence over actions that determine the well-being of people. The topic of equity is closely linked to that of participation of all the members of the population (men, women, children, young people and the elderly of all ethnic origins) in the activities that affect their well-being; in other words, to the expansion of the citizenship of rural inhabitants.

This concept of equity is applied not only to individuals, but also to specific social groups, geographic areas such as towns, microregions and regions, ethnic groups and specific social categories such as women and young people. SRD seeks not only to eliminate economic and social exclusion, but also the regional and interregional imbalances that generate conflicts and significant differences in the standards of living within a society. SRD is participatory by nature, and seeks self-management and a commitment to the rest of society.

Competitiveness not only refers to the fact that the products of the projects established within a concept of expanded agriculture must be successful on the market, as a requisite for generating employment and income, but also to the fact that rural development must be viewed as a socially and politically beneficial activity that generates dividends for society in general and, as such, merits the investment of resources. In this regard, actions must be taken to encourage public and private investment in rural development, so that it can compete with other production sectors for scarce resources. Such actions, however, require the existence of a strong and efficient state.

Solidarity is one of the basic principles that must underpin SRD. In practical terms, it consists of organizing individuals so that they can act, participate, share and reach decisions together. The isolated actions of individuals and production units are highly inefficient from the point of view of development. Solidarity, however, can take place among individuals that identify with one another and feel that they belong to a group which shares certain values and goals. Closer relations among the different levels of rural society, and between rural society and the rest of the society, demands an ethic in which economic and social relations among individuals and groups are governed by transparency and reconciliation of interests.

gender, women *and sustainable rural development*

One of the most pressing tasks for SRD is achieving social and gender equity for the different sectors that make up rural and urban societies, while respecting their particular cultural, ethnic and age-related characteristics. If actions are to be taken to achieve equitable relations between the women and men, the gender perspective must be incorporated into rural development policies, programs and projects, in order to identify the differences and inequalities that exist between the sexes, and the political, economic and cultural factors that are responsible for same.

One of IICA's objectives has been to implement actions on behalf of rural women and institutionalize the gender approach in the agricultural and rural sectors. Since 1990, the Institute has given priority to the implementation of major hemispheric, regional and national projects in this field, and conducted research on agricultural policies and their impact on women food producers in 18 western hemisphere countries. Actions in the field of educational communications and rural women that also got under way in 1990 led to the implementation of a regional project on gender, communications and sustainable development in Central America.

The long list of IICA efforts to consolidate SRD for women includes important national and regional projects that incorporated the gender perspective and specific actions targeted at women.

An important part of the strategy for action in this field is the establishment of strategic alliances and the articulation of efforts with national, regional and hemispheric organizations, projects and networks.

At its Ninth Regular Meeting, held in Chile in October 1997, the Inter-American Board of Agriculture adopted a resolution in which it asked IICA to promote the implementation of a program aimed at strengthening the participation of rural women in production and business chains, and to create a special fund to secure resources to finance the activities under said program.

The Directorate of Sustainable Rural Development mounted two major hemispheric initiatives in order to carry out this mandate: the project Gender in Sustainable Rural Development and the Business Development Program for Rural Women (PADEMUR), through which it is articulating and channeling its efforts to institutionalize the gender perspective, and for specific work with rural women.

institutionalization of the gender perspective

It is essential that the Institute and other national and regional organizations involved in SRD institutionalize the gender perspective and incorporate it into their policies, programs and projects, as part of a concerted effort with the public and private sectors and civil society.

The institutional efforts needed to address the specific characteristics of men and women in rural areas and establish a relation

ship between them, based on mutual respect and solidarity and in accordance with new principles governing participation, concerted action and democracy, should be based on the formulation of gender policies, the implementation of pilot experiences, research, the preparation of projects and the production of educational materials and technical documents. The aim must be to promote changes in relations between and women and in the living conditions of rural women, so that SRD is based on the well-being and quality of life of the entire population.

In work related to gender, there has been a strong tendency to formulate programs for women without taking into account the key role they play in the rural economy, or short-term actions without a strategic vision of, or linkages with, sectoral policies. The trend has also been to implement training activities on gender to broaden the knowledge and raise the awareness of the personnel involved, but which fail to deal with the transformation and modernization of institutions and programs required to institutionalize the gender perspective.

One of the key challenges for work with a gender approach is how to articulate actions targeted specifically at women with overall rural development strategies. The gender perspective must also be viewed as a central element of development rather than activities in SRD processes that are little more than an afterthought.

Some of the key areas of work are: the development of strategies and methodologies for incorporating the gender perspective at the institutional level; gender-specific indicators and statistics; training for management and technical staff working in the field of project formulation and evaluation; and proposals for technology innovation and transfer designed to shorten the working day and reduce the workload of women, facilitate the redistribution of responsibilities within rural families, organizations, communities and working environments, and increase productivity.

The efforts to institutionalize the gender approach should also include the setting of budgetary priorities and a review of the make up of working teams and the coverage and thematic organization of their work.

A key element of the work of institutionalizing the gender perspective entails strengthening the relationship between women and men and thereby increasing democratic participation, solidarity and equity. It must be borne in mind that relations between men and women reflect the fundamental values of a given society, and that it is in their day-to-day activities, and even in their private lives, that the foundations of a just and equitable society are laid.

women and sustainable rural development

Although women are playing an increasingly important role in agricultural and rural activities, their access to productive resources and services is also increasingly limited. The factors limiting this access must therefore be recognized in order to create the conditions needed to reverse this trend. The aim must be to strengthen the participation of women in productive activities and articulate it with political and economic decisions.

If the living standards and quality of life of the rural population are to be improved, the inequalities and disadvantageous position faced by women must be recognized, given the wide range of activities they carry out and their lack of access to productive resources, services and the benefits of development.

Once the specific situation of women has been recognized, the next step is to identify a direct line of work with rural women aimed at strengthening their political, social and economic participation at the local, national and regional levels. The following aspects should be borne in mind when addressing the question of work with women:

- The information available on women's participation in agriculture and rural life is limited and inadequate. Research is therefore needed to provide sufficient pertinent information for formulating and implementing policies aimed at achieving gender equity.

- If women's participation is to be strengthened, opportunities must be created for them to participate in existing organizations and to enhance their organizational and leadership skills.

- The exercise of democracy must be strengthened at the local, national and regional levels, based on the premise that enabling rural women to participate involves not only creating opportunities, but also the conditions in which they can take advantage of them.

- Development efforts can help modify the unequal relations between men and women, which are one of the main constraints to achieving equity, sustainability and competitiveness in the rural sector.

- Since projects have differentiated effects on women and men, due to their unequal participation in the different activities of the community or region, efforts should be undertaken to identify the ways in which the responsibilities of women and men are distributed on family production units and in communities, and to gauge the impact of project in that light. This is essential so as to be able to identify the benefits for the female and male populations.

- To do this, the role of women as producers, in reproduction and in community management must also be recognized, so as to facilitate their participation in the vitalization and modernization of the rural economy.

- The problems of rural women are closely related to poverty. The insertion of rural women and women farmers into production is structural and permanent. It is therefore essential to understand their situation and status as women if the modernization and diversification of the rural sector is to be achieved. The solution does not lie in promoting aid policies to combat poverty, but in implementing comprehensive policies.

- Since men and women participate in different ways, alternative and complementary ways must be developed to enable the population to participate in economic, political and social decisions.

- Another key element is the need to facilitate the conditions whereby women can create fora to interact and discuss their identity as mothers, workers and active contributors to rural development.

- The identity of rural women must also be strengthened so that they exercise their right to have access to different productive resources, and to participate, based on their own criteria and interests, in the distribution of the social and economic benefits of agricultural production.

- Efforts must be made to design appropriate personalized training strategies and methodologies that capitalize on the experiences of individuals and organizations working to achieve equality and equity, and which will strengthen men and women's capacity to promote production and employment initiatives based on equity. These will also make it possible to meet the differentiated needs of the population involved.

- If rural women are to participate in different political, economic and organizational bodies, their human development (self-esteem, skills and leadership abilities) must be strengthened. Organizational practices must also be changed, so as to take account of the experience, interests and priorities of women.

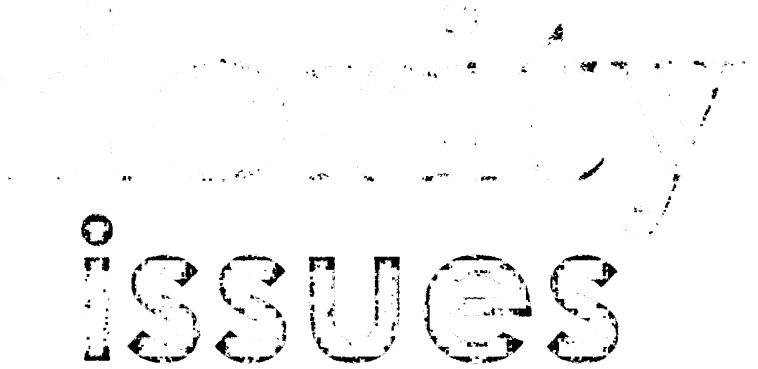
∞Incorporating women's interests and needs calls for inclusive, representative, democratic and viable proposals that will benefit the rural population as a whole, both women and men. Increasing the participation of women in decision making and in the management of development ensures that development proposals are representative and viable.

∞Given the influence that women have in modifying the living conditions of their families, greater access to basic services increases the well-being and quality of life of rural families.

∞The new ways in which civil society, the State and the private sector are articulated must guarantee both the representativeness of women's participation and the incorporation of their interests ands specific needs as priorities of rural development.

∞Efforts must be made to eliminate the compartmentalization of opportunities for participation, under which men participate more in trade, political and economic organizations, while women gravitate toward social groups and organizations.

Agreement and consensus-building on the priorities identified by men and women must be promoted as part of a fundamental exercise in harmonious democratic relations. Achieving sustainable development largely depends on the capacity to articulate all the social actors involved, meeting their needs and equitably distributing the economic and political benefits between women and men.



The concept of SRD described in this document addresses most of the challenges facing the rural areas of Latin America and the Caribbean. However, for the Institute to become a leader in this field a major effort is required to establish priorities and the areas on which it should focus. It will then be able to offer high-quality technical cooperation, reflected in specific projects that demonstrate the technical management of the problems and generate methodologies that can be adapted to the different regional conditions that IICA has managed to identify.

Accordingly, a systemic thematic structure is proposed comprising three large groups of topics: job creation, income and the plowing back of surpluses; the construction of the new institutional framework, and the development of the rural habitat and the sustainability of the environment. Each of these includes aspects on which attention should be focused, keyed to regional emphases and the interests of the countries, and which could lead to the formulation of specific projects in rural societies. The priority topics are complementary components of a single system, ranked in order of importance and addressed by means of differentiated policies, at operating levels that provide a platform for testing and adjusting them, with mechanisms for the permanent participation of the different actors that make up rural societies.

employment, income and he plowing back of surplus

This group of topics includes actions involving the development of concepts, working methods and proposals that could be used as input for the design of policies, programs and projects aimed at generating employment and income and channeling the initiatives of small and medium-scale farmers, with a view to creating mechanisms for the generation and plowing back of surpluses through competitive business activities. Actions of this kind will ensure that these groups are incorporated effectively into the economies of the countries.

Microenterprises and small businesses that will generate capital and direct employment must be created and strengthened in order to help alleviate poverty and improve the productive use of natural resources. This entails, on the one hand, improving the access of rural dwellers to the economic and technological resources of the public and private sectors; and, on the other, designing assistance, information and management services (including information and business management training centers) to enable enterprises run by small farmers to participate competitively in markets of inputs, products and services. Efforts must be made to further incorporate small-scale agriculture into agrifood chains and non-agricultural industrial activities, and to improve access to markets of highly profitable products and services. The promotion of business initiatives should include the participation of young people of both sexes, so that they can be trained in the productive use of natural resources and the preservation of biodiversity.

Actions in this area should be supported by studies and research on rural communities and the new groups that carry out and benefit from SRD. These should include studies on the composition of the income of rural families in the new rural-urban context, and on the current approaches to the business development of producers and needs that are not being addressed, including variables such as marketing, technology transfer and participation in agroindustrial processing chains. Efforts should also be made to establish and improve legal protection for farmers, including issues such as the legal operations of land tenure systems and programs and actions that promote land market systems.

It is essential that national and international organizations coordinate their efforts in these areas, in order to establish investment plans and implement complementary actions that will contribute to capital formation, job creation and lower transaction costs and levels of risk.

the new institutional framework

The aim of actions in this area is to support the countries in their efforts to create an intelligent, flexible and efficient institutional framework that will encourage rural dwellers to participate in the definition and implementation of their own sustainable development process, and to support them in its evolution. Actions in this field also include the efforts needed to lay the foundations for equity, and access to effective support services that will incorporate the relatively least developed actors into competitive productive activities and organizational systems and participatory bodies, which are the vehicles for democratization and social integration within a framework of common interests and human development.

SRD policies, programs and projects should be designed, formulated and implemented to meet the needs of small and medium-scale actors in rural societies in the different regions of Latin America and the Caribbean. These needs have to do with the economic-productive, socio-cultural, political-institutional and environmental dimensions. IICA should support the efforts of the ministries of agriculture and specialized entities in the public sector to develop a new type of relationship with rural dwellers. The traditional vertical approach should give way to more horizontal relations with individuals and groups.

biblio

bibliography

CELADE (1995), Boletín Demográfico, Nº 56 (July 1995).

CELADE/IDB (1996), Impacto de las tendencias demográficas sobre los sectores sociales en América Latina; contribución al diseño de políticas y programas. Santiago, Chile.

Chiriboga, M., 1991, Elementos básicos para una propuesta sobre el tema de la equidad. IICA, Program III: Organization and Management for Rural Development. San José, Costa Rica.

Dirven, M., 1995, "Expectativas de la juventud y el desarrollo rural", ECLAC magazine, Nº 55 (April 1995), 123-137.

ECLAC, 1998, América Latina y el Caribe; Políticas para Mejorar la Inserción en la Economía Mundial. Santiago, Chile.

ECLAC, 1996, Panorama social, 1995. Statistics and Economic Projections Division / Social Development Division. Santiago, Chile.

ECLAC, 1997, La brecha de la equidad; América Latina, El Caribe y la Cumbre social. Santiago, Chile.

ECLAC-IICA, 1997, Panorama de la agricultura de América Latina y El Caribe en las últimas décadas. Production and Business Development Division-ECLAC / Southern Regional Center-IICA (December).

IDB, 1998a, After a Decade of Reforms; Economic and Social Progress in Latin America, 1997 Report. Washington, D.C.: IDB.

IDB, 1998b, Elementos estratégicos para la reducción de la pobreza rural en América Latina y El Caribe. Sustainable Development Department, Environment Division. Washington, D.C. (April).

IDB / ECLAC / UNDP, 1995, Informe de la Comisión Latinoamericana y del Caribe sobre el desarrollo social 1995. Santiago, Chile (January).

IICA, 1991, Bases para una agenda de trabajo para el desarrollo agropecuario sostenible. San José: Program Papers Series, Nº 25.

Kliksberg, B., 1998, Repensando el Estado para el Desarrollo Social: Más allá de Dogmas y Convencionalismos. San José: University of Costa Rica (Inaugural Lecture, First Term, 1998).

López Cordovez, L., 1993, Lineamientos conceptuales para el desarrollo rural sostenible y equitativo. San José: IICA / GTZ.

Martín Patiño, J. M.; Blanco, A.; Vílchez, L. F; Maté, V.; Juárez, R.; Barbero, J.L, Chueca, A., 1998, Recuperación de lo rural; un mundo distinto cada vez más cercano. Madrid: Fundación Encuentro.

Reca, L.G.; Echeverría, R. G., 1998, Agricultura, medio ambiente y pobreza rural en América Latina. Washington, D.C.: Food Policy Research Institute / Inter-American Development Bank.

Stiglitz, J., 1998, Más instrumentos y metas más amplias: desde Washington hasta Santiago. San José: paper presented at the Seminar "Estabilidad y desarrollo económico en Costa Rica: Las reformas pendientes", April 23, 1998 (mimeo.).

United Nations, 1995, La mujer en una economía mundial en evolución; Estudio Mundial sobre el papel de la mujer en el desarrollo, 1994. New York: Department of Policy Coordination and Sustainable Development.

World Bank, 1997, World Development Report 1997. Washington, D.C. (June).

FECHA DE DEVOLUCION

IICA
P01-38

Autor

Título El Desarrollo Rural Sostenible y Cooperación Técnica del IICA: Valor y vigencia

Fecha Devolución	Nombre del solicitante

diseño y diagramación pyp

development desarrollo rural ru

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA
INTER - AMERICAN INSTITUTE FOR COOPERATION ON AGRICULTURE
Fax 506. 229 2135 Tel 506. 229 0222 E mail mbenuett@iica.ac.cr- p.o.box: 55 - 2200 Coronado, San José, Costa Rica

1998

Dirección de Desarrollo Rural Sostenible
Sustainable Rural Development Directorate

IICA

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA — OEA —